

# PREFACIO

## ENTRE LOS MERCADOS, LOS GOBIERNOS Y LOS CIUDADANOS

En la primera quincena de enero de 1997 las oficinas de estadística de los Estados Unidos divulgaron los datos oficiales sobre el desempleo en el último trimestre, mostrando que éste había bajado medio punto porcentual y llegaba a uno de los menores niveles de las últimas décadas. Junto a la noticia la prensa divulgó la reacción inmediata de la bolsa de valores: el índice Dow Jones cayó de inmediato. Lo que para la gente era una buena noticia resultó ser un mal síntoma para Wall Street.

No hace muchos años los economistas hubieran esperado el resultado inverso: más gente trabajando quiere decir mayor capacidad de consumo, más producción, crecimiento económico y por lo tanto mayor prosperidad para las empresas y mejores cotizaciones de sus acciones. En bolsas de valores dominadas por los capitales especulativos, en cambio, lo que es bueno para los que trabajan y producen genera temores de inflación, recalentamiento de la economía, aumento de las tasas de interés y por consiguiente menor rentabilidad para las colocaciones financieras. Los economistas ya aceptan una cierta tasa de desempleo como inevitable, o incluso necesaria para contener la inflación. Hasta hace poco el desempleo era visto como una anomalía, un síntoma de que algo no andaba bien.

A lo largo y a lo ancho de América Latina similar oposición entre las finanzas y la gente se repitió durante 1996. Superado el «efecto tequila» (la caída en cadena de los mercados financieros después de la bancarrota mexicana de fines de 1994), las bolsas volvieron a entrar en apogeo a medida que aumentaba el desempleo, se derogaban leyes de protección de los trabajadores (la eufemísticamente llamada «desregulación del mercado de trabajo») y aumentaba la concentración del ingreso.

En febrero de 1996 durante una reunión convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el consultor Luis Ratinoff divulgó un estudio comparativo sobre tasas de homicidios en el mundo: menos de dos cada cien mil habitantes en Asia y el Oriente Medio. Entre dos y tres para los países desarrollados (sin contar a Estados Unidos, con 11). Rusia registró más de cinco muertes cada cien mil habitantes, mientras que Argentina, que tradicionalmente tuvo un índice «normal» de menos de cinco subió a 12, el mismo nivel de Sri Lanka, donde hay una guerra civil. Un país tradicionalmente pacífico como Venezuela registraba 16. «Una sociedad como la venezolana, donde el 10% más rico capta el 47% de los ingresos y el 10% de los pobres solamente el 1,7% probablemente va hacia alguna forma de guerra civil» comentó el economista y parlamentario venezolano Teodoro Petkoff. La relación entre homicidios y concentración de ingresos parece corroborada por el caso de Brasil, que con la distribución de ingresos más desigual del mundo (51% de la riqueza en manos del 10% de la población) tiene 24 homicidios al año cada cien mil habitantes. Mientras tanto para Uruguay, con la mejor tasa latinoamericana de distribución de ingresos (excepto Cuba) y el más alto índice de desarrollo humano de la región, la tasa era de 4, similar a la de Francia e Italia.

No obstante, en declaraciones al semanario «Búsqueda» (Uruguay) el autor del estudio señaló que es probable que la criminalidad «aumente un poco» en este país, que tiene a Argentina y Brasil como vecinos y en el que «las tendencias económicas van a crear un poco de inestabilidad en esta sociedad que hasta ahora ha sido tan estable». Sorprendentemente, las «tendencias económicas» que ese mismo semanario refleja son las que el sistema financiero internacional consideraría buenas: la inflación baja, el déficit fiscal disminuye, el producto bruto aumenta...

Para el autor del estudio «una de las razones por las que en Europa la criminalidad es más baja es porque hay un sistema de seguridad social» que reduce las incertidumbres personales sobre el futuro. Las sociedades asiáticas donde la tasa de homicidios es más baja aún no tienen una sofisticada seguridad social manejada por el Estado, pero sí familias tradicionales y redes de relaciones humanas que cumplen similar función.

Y estos mecanismos están en la mira de las instituciones internacionales que más entusiastamente promueven la globalización económica: la «desregulación» del mercado laboral en los países industrializados fue reclamada como necesaria para la economía por

el director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, durante la sesión inaugural de la primera reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, en diciembre de 1996 en Singapur.

La «mano invisible» del mercado, por sí sola, no solucionará los problemas sociales. Esta afirmación resultaba obvia durante las primeras ocho décadas del siglo XX, en las que la discusión se centraba en cuánta intervención era necesaria, por parte de quiénes y *con qué mecanismos*. Fue cuestionada por la teoría y la práctica del presidente Ronald Reagan (Estados Unidos) y la primera ministra Margaret Thatcher (Reino Unido) durante los años 80. Y vuelta a popularizar, en momentos en que las nuevas doctrinas triunfaban a lo ancho y a lo largo del mundo al terminar la guerra fría, por la campaña electoral de Bill Clinton, quien triunfó en 1992 con el lema «put the people first» (la gente es primero) y ofreciendo una respuesta clara sobre el origen de los problemas sociales crecientes: «it's the economy, stupid!».

## PARA QUE LOS COMPROMISOS SE CUMPLAN

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, realizada en marzo de 1995 en la capital de Dinamarca y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en setiembre de ese mismo año en la capital china comprometieron a los gobiernos del mundo con un ambicioso programa de combate a la pobreza y a la discriminación de género, promoción del empleo e integración de los excluidos y marginalizados. Son compromisos políticos solemnes, pero no obligatorios («no legalmente vinculantes» en la jerga técnica) como sí lo son las promesas hechas por los gobiernos ante la Organización Mundial de Comercio, que reemplazó al GATT al terminar la «ronda Uruguay» de negociaciones, o las condicionalidades impuestas a los países endeudados por el Banco Mundial o el FMI.

La voluntad política indispensable para llevar estos compromisos a la práctica en cada país sólo se fortalecerá con una ciudadanía capaz de controlar su cumplimiento. Para contribuir a ella un grupo de organizaciones sin fines de lucro que acompañó las deliberaciones de la Cumbre Social y la Conferencia de la Mujer resolvió iniciar el «Control Ciudadano», un informe anual sobre el cumplimiento de lo acordado hecho por quienes están trabajando en estos temas sobre el terreno. En 1996, al cumplirse un año de la Conferencia de Copenhague se publicó una edición experimental, que incluía trece informes nacionales. La idea fue recibida con entusiasmo y esta edición 1997, No. 1, ha duplicado el número de informes nacionales y ha consolidado una red comprometida a seguir de cerca estos temas hasta que en el año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas evalúe a nivel de jefes de Estado los logros y trace las metas de desarrollo social para los primeros años del nuevo siglo.

La situación, historia y trama social de cada país es distinta y, en definitiva, el juicio sobre los logros y metas de cada sociedad debe ser hecho desde su interior. Por ello «Control Ciudadano» sólo incluye informes hechos en el país, por organizaciones activas en tareas de desarrollo social. Se promueve, además, que la responsabilidad de informar la asuman grupos de organizaciones y, donde existen, las coaliciones locales de seguimiento de las conferencias.

Estas organizaciones y coaliciones son la esencia de «Control Ciudadano». En marzo de 1996, los participantes en la iniciativa designaron un grupo coordinador, integrado por Leonor Briones de Filipinas, Yao Graham de Ghana, Gina Vargas de Perú, Caroline Wildeman de Holanda y Roberto Bissio de Uruguay. Al Instituto del Tercer Mundo, con sede en Montevideo, se le encomendó la tarea de editar el informe internacional y la secretaría de la red.

En el año transcurrido, la idea del «Social Watch» fue promovida en diversas reuniones internacionales y con sus aportes se perfeccionó la metodología de trabajo. Del análisis de los diez compromisos de Copenhague, el programa de acción de Beijing y las metas trazadas por otras conferencias internacionales se extrajeron 13 compromisos hacia metas verificables capaces de ser evaluados. Redes temáticas internacionales de ONGs y organizaciones sociales, en particular los sindicatos, nos acercaron sus propios informes, intercambiamos datos y enfoques. En varios países se hicieron lanzamientos del informe a nivel nacional, que en algunos casos se convirtieron en valiosas oportunidades de debate entre organizaciones de la sociedad civil, gobierno y organizaciones internacionales sobre las políticas nacionales de desarrollo social. Nuevos grupos nacionales de «Control Ciudadano» se constituyeron y trabajaron para contribuir a este informe. ●

Para facilitar el análisis y la comparación entre los informes nacionales, se diseñaron pautas comunes. Y se inició la ardua tarea de concebir índices que sirvieran de medida y permitieran «premiar» avances o «condenar» moralmente los incumplimientos. Todo el mundo sabe que un número es incapaz de reflejar la riqueza de matices, pero a todos nos gusta saber «quien ganó»... y en particular a la prensa, acostumbrada a informar sobre Premios Nobel, Oscars o medallas olímpicas, y sin la cual no hay formación de opinión pública.

Las oficinas de estadísticas y censos de cada país recaban datos que miden diversos aspectos de la realidad; anualmente el Informe de Desarrollo Mundial del Banco Mundial registra la riqueza de las naciones, medida en términos de su producto bruto per capita. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo complementa esta medida con datos de educación, salud y distribución del ingreso para llegar al Índice de Desarrollo Humano. UNICEF, la agencia encargada del seguimiento de los compromisos trazados por la Cumbre de la Infancia, desarrolló indicadores de progreso, pues no se trata solo de registrar quien está mejor o peor, sino qué países se esfuerzan más en el cumplimiento de las metas. «Control Ciudadano» aspira a desarrollar un «Índice de Compromisos Cumplidos», capaz de evaluar a quienes, después de haberse comprometido solemnemente deben tomar las decisiones que

hagan realidad esos compromisos. Ese índice no está pronto aun, (la información necesaria sólo está disponible para un puñado de países) pero este informe inicia la discusión sobre la metodología que lo hará posible y avanza en indicadores parciales de progreso hacia las metas acordadas.

Las conclusiones las sacará el lector. Las críticas y comentarios son bienvenidas. Si este informe les fue útil, nos ayudará mucho saber cómo podría serlo más.

ROBERTO BISSIO

- Los informes nacionales que por razones de espacio no pueden ser incluidos en su totalidad, así como las series estadísticas completas en las que se basan los análisis y la discusión metodológica están disponibles en la Internet: <http://www.chasque.apc.org/socwatch/>

### OMC: CUMPLIMIENTO CERO

*La Organización Mundial de Comercio no ha cumplido con lo que los jefes de Estado le solicitaron durante la Cumbre Social, ni tiene previsto hacerlo, confirmó públicamente un vocero autorizado de la OMC durante una reunión con ONGs en Ginebra en setiembre de 1996. La Declaración de Copenhague menciona varias veces a la Ronda Uruguay y la liberalización del comercio mundial en varias oportunidades, casi siempre con un tono equilibrado entre el optimismo por las promesas de crecimiento económico y la constatación de los múltiples problemas de nuevo tipo que se derivan de la globalización. Sin embargo poco se solicita de la OMC misma: que estudie los impactos sociales de la liberalización del comercio, en especial en los países menos desarrollados. No se reclamó de la OMC que cambiara o ajustara sus políticas, o que coordinara sus acciones con las de las Naciones Unidas, como sí se le solicitó al Banco Mundial y, en menor medida al Fondo Monetario Internacional. No se le pidió que dedicara más atención a los problemas de los pobres, de los desempleados o de las mujeres, no se la exhortó a realizar ningún gasto con sentido social. Simplemente se le pidió que estudiara el impacto social de las políticas que promueve con entusiasmo. El motivo alegado por el secretariado de la OMC para su no cumplimiento fue que esta organización, surgida como sucesora del GATT al culminar la ronda Uruguay de negociaciones, «sólo puede hacer lo que las partes (o sea los Estados miembros) le piden». Las partes del GATT y los gobiernos que se reunieron en Copenhague son los mismos, quitando uno aquí y agregando otro allá, ¿no debería entenderse la voluntad expresa de los jefes de Estados reunidos en Dinamarca como expresión suficiente de lo que quieren las partes de la OMC? El secretariado de la Organización sostiene que no, y que si las partes quieren que la OMC haga algo se lo tienen que solicitar según sus propios procedimientos formales. Mientras tanto, oficialmente la OMC no se ha enterado de que existieron las cumbres. Las partes tuvieron una oportunidad de decirle a la OMC si querían tal estudio durante la primera reunión ministerial de la organización, realizada en Singapur en diciembre de 1996. No obstante, ninguno de los ministros de Comercio allí reunidos hizo referencia alguna a la Cumbre Social o a la Conferencia de la Mujer en sus discursos. La temática social que sí se discutió fue la de la posible inclusión de una «cláusula social» en los acuerdos comerciales, una tesis defendida por algunos gobiernos de Europa y América del Norte y sindicatos afiliados a la CIOSL y resistida por los gobiernos, las ONGs y los sindicatos del Sur, que ven en ella una posible excusa para el proteccionismo comercial. Todo el tema de los vínculos entre comercio y derechos laborales fue derivado por la reunión a la Organización Internacional del Trabajo, que es la agencia de la ONU con competencia en el tema. Y en su discurso final, el director de la OMC, Renato Ruggiero, celebró como «el rostro humano de la globalización» y de «enorme interés social» la firma de un acuerdo en Singapur que reducirá a cero antes del año 2000 las tarifas aduaneras de productos de alta tecnología para computación y telecomunicaciones. La idea parece ser que con ello «cada aldea tendrá acceso a toda la información del mundo» (un optimismo que se contradice con el hecho de que, según las políticas de propiedad intelectual defendidas por la OMC esa información habrá que pagarla más cara). Pero si se le pregunta a Ruggiero sobre las bases científicas de su afirmación, el jerarca no debiera poder responder, ya que las partes no le han encomendado ningún estudio sobre ese tema.*